

EL RECUADRO

El pasado mes julio, unas complejas negociaciones dieron como resultado que España podrá acceder a 140.000 millones de fondos europeos para paliar los efectos económicos, laborales y sociales de la crisis del Covid.

Ese volumen de ingresos, el 11 por ciento del PIB aproximadamente, entre transferencias a fondo perdido - unos 72.000 millones de euros - y préstamos, deberán estar asignados en 2024 y su desembolso deberá ejecutarse antes de terminar 2026. Para ello, el 70 por ciento de los fondos deberá estar presupuestado para 2021 y 2022 y el resto partir de 2023.

El cumplimiento de esos plazos exige entregar antes del 15 de este mes de octubre un primer esbozo del Programa con el destino de las inversiones y el detalle de compromisos firmes para un plan de reformas, junto con el borrador con las líneas maestras de los Presupuestos Generales del Estado.

Soslayando la actual falta de coherencia de la política económica y la paralización de la Administración que se arrastra desde marzo, si esas condiciones se cumplieran en tiempo y forma, antes del 1 de enero de 2021 debería entregarse el documento cerrado para acceder a los fondos.

Su tramitación, en el improbable caso de que contara con todas las conformidades, terminaría el 31 de abril. Dos meses después, en junio podrían recibirse las primeras transferencias ejecutables, siempre sujetas a la comprobación del cumplimiento de los objetivos de inversión y los compromisos de reforma.

Mientras tanto, España se encuentra en una recesión sin precedentes y todo parece indicar que la economía, que inició el año con una moderada pero constante deceleración acabará el ejercicio con la mayor caída del PIB de nuestra historia que será también el peor registro de todos los países de nuestro entorno.

El impacto del desplome en términos de empleo y bienestar social resulta difícil de calcular ante la falta de estrategia y previsión políticas que añaden incertidumbres a un escenario ya de por sí inquietante y poco previsible.

Pero al margen de todo el entramado de plazos, planes, objetivos de inversión y compromisos de reformas de los que depende la recepción de los fondos, la economía productiva, la actividad y el empleo tienen por delante un camino de no menos de ocho meses en los que, si nada cambia, continuará la tendencia actual sin que quepa esperar que la situación política contribuya no ya a adelantar la recuperación económica, sino simplemente a amortiguar el desplome.

Nuestro país, con un elevado nivel de deuda soberana ya muy superior a su PIB, con poca capacidad de endeudamiento, tampoco puede esgrimir la sensatez política para atraer inversores que, más que nunca, extreman su sensibilidad a la opinión de los mercados, de forma que las medidas de política económica percibidas como populistas se traducen en incrementos del coste financiero, lo que eleva los intereses a pagar a los acreedores.

Las medidas de gasto anunciadas serán con casi toda seguridad compensadas con subidas de impuestos que, inevitablemente, retraerán el consumo y la inversión y perjudicarán la actividad productiva, la recaudación y la capacidad de aumentar el gasto social. Paradójicamente, más medidas económicas populistas generarán más recortes. Y todo ello con un déficit fiscal, el segundo mayor de la zona euro, insostenible.

Las políticas conducentes al equilibrio fiscal y a impulsar el crecimiento económico, están muy lejos de la agenda política nacional en una situación de la economía española que augura más desempleo, más déficit fiscal estructural, menor sostenibilidad de las pensiones y bajo crecimiento de la productividad.

La situación no se revertirá mientras no se entienda que las empresas son las verdaderas responsables de crear riqueza y empleo, y se actué en consecuencia, favoreciendo la actividad empresarial y su competitividad, y eliminando trabas y obstáculos a su desarrollo.

La medida en que se asuma, se respete y se apoye este planteamiento marcará la duración y la profundidad de la recesión en la que estamos sumidos.

Crear un marco social y político favorable a las empresas ha sido siempre la mejor inversión de futuro de las sociedades avanzadas y hoy es la única forma de asegurar el futuro de España, su progreso y el bienestar de sus ciudadanos.